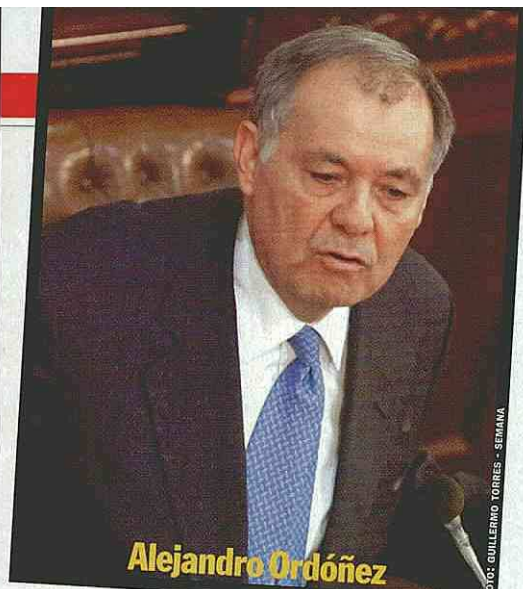


Judicatura con el argumento de que no se puede ser cura y juez al mismo tiempo porque “*puede afectar la imparcialidad y la independencia*”. Este mismo sacerdote, cuando se enteró de que Álvarez había sido nombrado conjuez de la Corte Constitucional interpuso una tutela que llegó al Consejo



Henry Villarraga



Alejandro Ordóñez



Martha Lucía Zamora

FOTO: DANIEL REINA ROMERO - SEMANA

## 2 UN MAGISTRADO CON RABO DE PAJA

La segunda microguerra se desató cuando el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, decidió dictar pliego de cargos por los presuntos delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad contra la fiscal Martha Lucía Zamora, por el proceso de la Fiscalía contra Sigifredo López, a quien señaló equivocadamente de ser uno de los autores del secuestro de sus colegas en la asamblea del Valle.

Zamora, coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte, uno de los más altos cargos en el búnker, dijo en su momento: “*Espero que esto no sea una retaliación en mi contra*” y recusó al magistrado Villarraga con el argumento de que su despacho tiene una investigación abierta de tiempo atrás contra él por el ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura.

de Estado alegando que se había violado el principio de igualdad. El Consejo de Estado le negó la tutela pero decidió mandar el caso a la Comisión de Acusaciones para que investigue si el padre Álvarez incurrió en alguna irregularidad.

Llama la atención que quien compulsó las copias fue el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, uno de los perjudicados por el fallo de las pensiones y quien ha utilizado duros términos para referirse a los magistrados que profirieron el fallo.

No deja de ser preocupante que juristas reconocidos por su honestidad y verticalidad ahora estén contra las cuerdas y teniendo que atajar denuncias por un fallo que está en total sintonía con el bien público y le pone freno a desmedidos intereses particulares. Los pájaros tirándoles a las escopetas.

Y eso no es lo único. La artillería contra el histórico fallo de pensiones también incluye dos solicitudes de cacaos de la Justicia para que se anule el fallo. La primera, de la Asociación de Exmagistrados que trata de poner en duda a los conjuces: “*Dos de ellos estaban incurso en causales de impedimento*”. Y la segunda de la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda.

## LAS PELEAS NO SON UNA SIMPLE ANÉCDOTA, BUSCAN ECHAR PARA ATRÁS LOGROS IMPORTANTES O TORPEDEAR A FUNCIONARIOS VALIOSOS

Escierto que en el proceso que la Fiscalía le abrió a Sigifredo López se cometieron errores y probablemente abusos. Pero lo que despertó todo tipo de suspicacias es que el magistrado Villarraga no se hubiera declarado impedido para corregir la plana a la fiscal Zamora teniendo en cuenta que no solo es uno de los protagonistas del bochornoso escándalo del carrusel de las pensiones, sino que también es un reconocido exsocio y aliado del registrador nacional, quien hasta hace poco estaba siendo investigado por la misma fiscal.

El caso escaló a un punto en que el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo pública su preocupación. Luego del charrón, Villarraga pidió ponerse al margen de la investigación.

## 3 LA DESOBEDIENCIA DEL PROCURADOR

El episodio más reciente del toma y dame en la élite de la Justicia tiene que ver con la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez, una vez más, a cumplir una orden de la Corte Constitucional. Esta vez se trata de un fallo de febrero pasado con el cual el alto tribunal le pide al procurador que aplique concurso de méritos para ocupar los cargos en la Procuraduría y dejen de ser cargos de libre nombramiento y remoción.

Lo que puede parecer una petición obvia, hoy no se aplica porque la Procuraduría perdería una buena parte de su encanto burocrático. La Procuraduría tiene 400 cargos de más de 18 millones de pesos y 300 más de 10 millones de pesos. Y de estos, muchos se reparten a familiares o amigos de congresistas o allegados al procurador.

El procurador Ordóñez, entonces, le respondió a la Corte Constitucional que no

puede hacer lo que le pide el fallo porque no tiene plata para hacer los procedimientos de calificación especiales que se necesitan para evaluar a los aspirantes. “*Lo ordenado por la Corte implica erogaciones económicas que deben ser moderadas para evitar un daño en las finanzas del Ministerio Público*”, dice la Procuraduría.

Esta no es la primera vez que el procurador Ordóñez apela a excusas para tratar de hacerle el quite a órdenes de la Corte Constitucional, que como en este caso buscan el bien público o protegen derechos. Ya ocurrió lo mismo con el fallo que permite el aborto en tres casos y como se mencionó antes con la petición de nulidad del fallo de las pensiones. ■